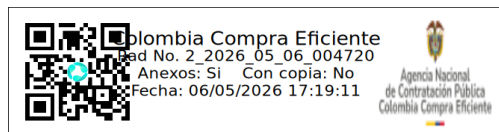


FORMATO DE RESPUESTA PQRS

Bogotá D.C., 06 de abril de 2026



Honorables

Olga Lucía Velásquez Nieto

John Jairo Gonzalez Agudelo

Alexander Bermúdez Lasso

Modesto Aguilera Vides

Jairo Reinaldo Cala

La Ciudad

Asunto: Proposición Audiencia Pública del Proyecto de Ley No. 270 de 2025
Camara "Por medio del cual se modifica la ley 80 de 1993 que expide el
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública"

Radicado: 1_2026_05_05_006032

Respetadas y respetados congresistas:

Cabe resaltar que, de conformidad con su solicitud y previa verificación en la plataforma de la entidad, nos permitimos informarle que este requerimiento ya había sido atendido previamente mediante el radicado de entrada **#1_2026_03_24_003994**, el día 20 de marzo de 2026, el mismo fue atendido dentro de los términos legales establecidos, mediante el radicado de salida **#2_2026_03_25_002966**, con fecha 25 de abril de 2026, tal como consta el anexo.

La Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Ley 4170 de 2011¹, es el ente rector de la contratación pública y actúa como un organismo técnico especializado, cuyo objetivo es desarrollar e impulsar políticas públicas y herramientas

¹ Las funciones asignadas a la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente se encuentran plasmadas en el artículo 3 del Decreto Ley 4170 de 2011.

FORMATO DE RESPUESTA PQRS

orientadas a la organización y articulación de los partícipes en los procesos de compras y contratación pública. En ejercicio de estas funciones, busca orientar la gestión contractual de las entidades hacia la reducción de los costos en sus operaciones, fortalecer los escenarios de transparencia y visibilidad de la gestión contractual pública y formular parámetros para la adecuada gerencia contractual del Estado².

En el marco de dichas competencias, a continuación, se procede a dar respuesta a las preguntas formuladas en los siguientes términos:

1. ¿Qué comentarios tiene su entidad al Proyecto de Ley 270/2025 Cámara de Representantes?

En el marco de las competencias asignadas a esta Agencia mediante el precitado Decreto Ley, me permito anexar nuevamente el documento que ya había sido remitido al Honorable Congreso de la República. En dicho documento se consignan noventa y dos (92) comentarios formulados por el equipo de la Subdirección de Gestión Contractual al Proyecto de Ley No. 554/2025C Cámara, "Por medio del cual se modifica la Ley 80 de 1993 que expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública", el cual fue incorporado en su integridad en el Proyecto de Ley No. 270/2025.

Al respecto, es pertinente señalar que, tras revisar en su totalidad el Proyecto de Ley No. 270/2025 Cámara, se constató que este corresponde al mismo texto ya analizado previamente. En consecuencia, esta Agencia reitera las observaciones presentadas y pone nuevamente a su consideración las anotaciones al articulado propuesto, las cuales se encuentran detalladas en el documento adjunto para su estudio.

En primer lugar, la Agencia resalta la importancia de impulsar una reforma estructural del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (en adelante EGCAP) que dé respuesta integral a los retos que afronta la contratación estatal en Colombia. Al respecto, se evidencia que el proyecto se

² Decreto Ley 4170 de 2011 "Por el cual se crea la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, se determinan sus objetivos y estructura". Artículo 2. Objetivo de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente: La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente-, como ente rector, tiene como objetivo desarrollar e impulsar políticas públicas y herramientas, orientadas a la organización y articulación, de los partícipes en los procesos de compras y contratación pública con el fin de lograr una mayor eficiencia, transparencia y optimización de los recursos del Estado.

FORMATO DE RESPUESTA PQRS

enfoca en modificaciones concretas frente a la incorporación de algunos principios, junto con otras disposiciones referidas a la capacidad contractual, la normativa aplicable a los contratos estatales, el uso de las potestades excepcionales, el perfeccionamiento del contrato, aspectos sobre la nulidad y la responsabilidad. Se trata entonces de una forma parcial que continúa la tendencia de modificar de manera fraccionada este marco jurídico. Adicionalmente, la reforma propuesta no incorpora medidas para hacer frente a los retos más importantes del sistema de compras públicas.

En este sentido, esta Agencia destaca, entre otros aspectos, la necesidad de que una reforma estructural del EGCAP implemente acciones para reducir la proliferación y dispersión normativa. Dado que las normas en materia de contratación pública actualmente son profusas, confusas e incluso contradictorias, los procesos de selección son en ocasiones innecesariamente extensos y complejos. Es fundamental que la reforma unifique las disposiciones contenidas en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, así como aquellas referentes a la contratación pública incluidas en normas relacionadas con otros temas, como es el caso de la Ley 590 de 2000, la Ley 1474 de 2011, la Ley 2069 del 2020, y el Decreto 1860 de 2021, entre otros. Afrontar este reto es urgente, pues es un factor que incrementa el riesgo de corrupción y facilita e incentiva prácticas para desviar los recursos públicos.

De forma similar, es importante dar respuesta a otros retos como el uso excesivo de regímenes exceptuados que incrementan los riesgos de implementación de modalidades no competitivas y al exceso de discrecionalidad en las adjudicaciones. Para esto es fundamental que el EGCAP se convierta en un marco normativo funcional y simplificado para la ejecución de los programas cada vez más complejos que deben atender las entidades, esto tiene el potencial de evitar la desviación a regímenes especiales y a la contratación directa.

Otros aspectos esenciales, como la revisión y fortalecimiento integral del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, así como del marco que rige el conflicto de intereses en la contratación estatal no se encuentran reflejados en el proyecto propuesto. Tampoco se evidencian disposiciones que refuercen los mecanismos para prevenir la colusión y otras prácticas restrictivas de la competencia en las compras públicas, como la posibilidad de otorgar herramientas a los agentes de las áreas de contratación para actuar cuando evidencian este tipo de acuerdos previo a la adjudicación de los contratos.

FORMATO DE RESPUESTA PQRS

La reforma propuesta tampoco afronta los desafíos transversales de la gestión pública, como es la tendencia a la sostenibilidad, el cambio climático y la necesidad de promover la innovación desde el sector público.

En segundo lugar, la Agencia evidencia con preocupación que una de las reformas propuestas en el proyecto de ley tendrá el efecto inevitable de incrementar el uso de la contratación directa. El uso indebido de modalidades de selección no competitivas ha sido resaltado por múltiples organismos internacionales y nacionales³ como uno de los obstáculos más importantes para la transparencia en las compras públicas.

Por lo anterior, el orden de preferencia propuesto en el artículo 22 del proyecto de ley tiene el potencial de convertirse en un nuevo foco de corrupción en la contratación estatal. Las reglas establecidas señalan que cuando la entidad estatal no cuente con la capacidad para ejecutar la obra o prestar el servicio público por cuenta propia, deberán propender por suscribir convenios interadministrativos con las entidades que puedan cumplir con la ejecución. En efecto, la regla propuesta dispone criterios difusos que fomentan el uso excesivo de una de las causales de contratación directa que contempla el estatuto. Lo cual incrementa el riesgo de corrupción y desincentiva la libre concurrencia como principio fundamental de la contratación pública.

El proyecto establece una sujeción estricta a los principios regulados exclusivamente en la ley propuesta, dejando de lado la realidad jurídica según la cual la contratación pública, si bien contempla principios propios, también está permeada por principios generales del derecho administrativo que no son mencionados, como la proporcionalidad, la legalidad, entre otros, que actúan de forma complementaria y transversal en las diferentes etapas y actuaciones del proceso contractual, desde la planeación hasta su ejecución y etapa postcontractual. Al ignorarlos, el proyecto limita la flexibilidad interpretativa necesaria para una adecuada aplicación normativa y gestión de los contratos estatales.

³ La revisión de 17 años de resultados del Índice de Transparencia de las Entidades Públicas (ITEP) y de estudios e investigaciones de Transparencia por Colombia muestra que una de las principales dimensiones que afectan la contratación pública es el exceso de la contratación directa en todos los niveles de la administración. Disponible en: Transparencia por Colombia. Radiografía de los Hechos de Corrupción 2021 – 2022 en Colombia. <https://transparenciacolombia.org.co/wp-content/uploads/2024/06/Radiografia-Corrupcion-VF-VF.pdf>

FORMATO DE RESPUESTA PQRS

Así mismo, se evidencia desconocimiento de los principios básicos de la contratación estatal, especialmente en lo que respecta a la remisión normativa a los contratos civiles y comerciales. Como es bien conocido, los contratos estatales, por su naturaleza, se construyen sobre la base de estas figuras del derecho privado, siendo estas normas aplicables en todo aquello no regulado expresamente por el EGCAP. Sin embargo, se evidencia que el proyecto propone una remisión normativa para el contenido del contrato estatal en materias como el derecho penal o disciplinario, cuyos objetivos, enfoques y principios difieren sustancialmente de los contractuales, lo que genera evidencia falta la técnica jurídica y resulta incoherente su redacción en la norma en que se incluye.

De otra parte, se evidencia que en el proyecto se asignan responsabilidades al supervisor y al interventor, que son propias del jefe o representante legal, en contradicción con lo establecido por la Ley 80 de 1993. Si bien estas figuras contemplan un marco de obligaciones de vigilancia y control frente a los contratos, la responsabilidad de dirección y control no se desprende del representante legal, por lo que un asunto como la imposición de sanciones, por ejemplo, no puede ser atribuido al interventor como se pretende en este proyecto. Esta confusión genera una alteración del principio de responsabilidad, afecta la seguridad jurídica y puede derivar en conflictos normativos entre los artículos vigentes y los propuestos.

También se advierte que, algunos artículos introducen disposiciones que ya reguladas por normas vigentes como la Ley 1150 de 2007 y la Ley 2195 de 2022, especialmente en lo relativo a la obligación de publicar toda la información contractual en el SECOP. Esta reiteración innecesaria no solo resta eficiencia al proceso legislativo, sino que también puede generar confusión interpretativa y operativa en las entidades estatales.

Contrario a lo propuesto, desde esta Agencia se considera que EGCAP requiere una revisión detallada de las causales previstas y los requisitos para la contratación directa, con el fin de limitar su uso a aquellos procesos en los que no es posible la pluralidad de oferentes. Lo anterior implica una reforma de las modalidades de selección que promueva la aplicación prioritaria de mecanismos competitivos sobre la contratación directa. Este enfoque no solo reduce el riesgo de corrupción, sino que permite que el Estado contrate productos, servicios y obras de mejor calidad, al mejor precio posible, cumpliendo el fin último de la contratación estatal de obtener "valor por dinero"

FORMATO DE RESPUESTA PQRS

y satisfacer de manera oportuna a las necesidades de la ciudadanía, en especial, de la población más vulnerable.

Finalmente, y en complemento a los comentarios inicialmente presentados, se destaca que la Corte Constitucional informó que, mediante la Sentencia C-033 de 202, fueron declarados inexecutable los artículos 100 y 101 de la Ley 2294 de 2023, los cuales regulaban las asociaciones público populares y las asociaciones de iniciativa público popular en el marco del Plan Nacional de Desarrollo. Según lo indicado por la Corte, dichas disposiciones vulneraban la reserva de ley prevista en el artículo 150 de la Constitución para la regulación de la contratación estatal, al delegar en el Gobierno Nacional la definición de elementos esenciales de la contratación pública —como los sujetos destinatarios y las condiciones para celebrar los contratos— y desconocer los límites de la potestad reglamentaria establecidos en el artículo 189-11 de la Constitución.

Teniendo en cuenta la decisión de la Alta Corporación, se recomienda suprimir todas las referencias a esta figura en el articulado, incluida la incorporada en el artículo 7, numeral 1, puesto que, a la fecha, dichas formas asociativas no existen en el ordenamiento jurídico.

Por las razones expuestas en el presente oficio y en los 92 comentarios expresado al margen del documento anexo, esta Agencia desaconseja continuar el trámite de la reforma planteada en el proyecto de ley del asunto, y extiende una invitación a los honorables congresistas para dialogar y acompañar una reforma estructural del EGCAP que fortalezca la transparencia, eficiencia, sostenibilidad e innovación en el Sistema de Compra y Contratación Pública de Colombia. Dicho lo anterior, manifestamos nuestra entera disposición a la posibilidad de realizar una mesa técnica con el equipo de la Entidad para avanzar en este objetivo.

2. Bajo el modelo actual de contratación en su entidad ¿cómo se desarrolla en los desafíos y objetivos misionales propios y cómo alteraría la mencionada iniciativa legislativa el proceso de contratación?

FORMATO DE RESPUESTA PQRS

La Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente-, ANCP-CCE, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Ley 4170 de 2011⁴, es una unidad administrativa especial, descentralizada de la Rama Ejecutiva del orden nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa y financiera, adscrita al Departamento Nacional de Planeación, cuyo objetivo es desarrollar e impulsar políticas públicas y herramientas orientadas a la organización y articulación de los partícipes en los procesos de compras y contratación pública.

En este entendido, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 80 de 1993 y los artículos 10, 14 y 24 de la Ley 1150 de 2007, la ANCP-CCE, ostenta la denominación de Entidad Estatal, es decir persona jurídica de derecho público creadas en virtud de la Constitución, la ley, ordenanza o acuerdo, o su creación sea autorizada por ésta.

En concordancia con lo anterior, la ANCP-CCE, en su calidad de entidad estatal, debe estructurar y adelantar sus procesos de contratación con sujeción estricta a los principios, reglas y procedimientos previstos en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública - EGCAP—Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y las demás disposiciones que los modifiquen, adicionen o complementen—. Lo anterior, en aras de garantizar la materialización de los principios de transparencia, economía, responsabilidad, eficiencia, eficacia y selección objetiva, que informan la actividad contractual del Estado.

En el marco de verificación del proyecto de ley, se encuentra necesario realizar previamente un breve análisis de la aplicación de la normatividad vigente desde la posición de entidad contratante, es así como en el desarrollo de los procesos de contratación que adelanta en ejercicio de sus funciones misionales y operativas, ha identificado que el marco normativo vigente presenta, en algunos casos, inconsistencias y diferencias interpretativas entre disposiciones normativas, lo cual dificulta su aplicación armónica tanto para la entidad que adelanta el proceso de contratación como para la adecuada acreditación de requisitos por parte de los proponentes

En el marco de la verificación del proyecto de ley, se considera necesario efectuar un análisis preliminar de la aplicación de la normatividad vigente desde la perspectiva de la entidad contratante, a partir de la experiencia en el desarrollo

⁴ Las creación y funciones asignadas a la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente se encuentran plasmadas en el artículo 1 y 3 correspondientes del Decreto Ley 4170 de 2011.

FORMATO DE RESPUESTA PQRS

de los procesos de contratación adelantados en ejercicio de sus funciones misionales y operativas, evidenciando así, que el marco normativo actual presenta, en ciertos casos, inconsistencias y divergencias interpretativas entre disposiciones normativas, lo que presenta dificultades tanto para la entidad, como para los proponentes en la adecuada acreditación de los requisitos exigidos.

Aunado a lo anterior, si bien es cierto que en la aplicación efectiva de los lineamientos normativos que regulan la contratación pública actualmente, la entidad como entidad contratante enfrenta desafíos constantes, no puede desconocerse que dichos lineamientos persiguen fines esenciales del sistema de compras del Estado: garantizar la libre competencia, promover la igualdad de oportunidades entre los participantes y asegurar el respeto a los principios de transparencia, eficiencia y economía.

En este entendido, el proyecto de ley en mención, establece una sujeción estricta a los principios regulados exclusivamente en la ley propuesta, dejando de lado la realidad jurídica según la cual la contratación pública, si bien contempla principios propios, también está permeada por principios generales del derecho administrativo que no son mencionados, como la proporcionalidad, la legalidad, el debido proceso, entre otros, que actúan de forma complementaria y transversal en las diferentes etapas y actuaciones del proceso contractual, desde la planeación hasta su ejecución y etapa postcontractual. Al ignorarlos, el proyecto limita la flexibilidad interpretativa necesaria para una adecuada aplicación normativa y gestión de los contratos estatales.

Aunado a lo expuesto, el proyecto de ley en mención está desconociendo e integrando condiciones adicionales a los particulares que participan en los procesos de selección generando barreras para su participación.

Así mismo, se evidencia desconocimiento de los principios básicos de la contratación estatal, especialmente en lo que respecta a la remisión normativa a los contratos civiles y comerciales. Los contratos estatales, por su naturaleza, se construyen sobre la base de estas figuras del derecho privado, siendo estas normas aplicables en todo aquello no regulado expresamente por el EGCAP. Sin embargo, se evidencia que el proyecto propone una remisión normativa para el contenido del contrato estatal en materias como el derecho penal o disciplinario, cuyos objetivos, enfoques y principios difieren sustancialmente de los contractuales, lo que genera evidencia falta la técnica jurídica y resulta incoherente su redacción en la norma en que se incluye.

FORMATO DE RESPUESTA PQRS

De otra parte, se evidencia que en el proyecto se asignan responsabilidades al supervisor y al interventor, que son propias del jefe o representante legal, en contradicción con lo establecido por la Ley 80 de 1993 y Ley 1474 de 2011. Si bien estas figuras contemplan un marco de obligaciones de vigilancia y control frente a los contratos, la responsabilidad de dirección y control no se desprende del representante legal, por lo que un asunto como la imposición de sanciones, por ejemplo, no puede ser atribuido al interventor como se pretende en este proyecto. Esta confusión genera una alteración del principio de responsabilidad, afecta la seguridad jurídica y puede derivar en conflictos normativos entre los artículos vigentes y los propuestos

Conforme a lo expuesto, la ANCP-CCE, en su calidad de entidad sujeta al EGCAP, y que en el marco de sus funciones, lleva a cabo la gestión contractual, encuentra evidente no solo la conveniencia, sino la necesidad de adelantar una reforma normativa de carácter integral que supere la actual fragmentación regulatoria, sin embargo, dicha reforma no puede limitarse a introducir ajustes parciales o a ampliar figuras excepcionales, sin resolver las causas estructurales por las debilidades que presenta actualmente el sistema, por el contrario, cualquier intervención legislativa que incremente los márgenes de discrecionalidad, sin fortalecer simultáneamente los mecanismos de selección objetiva y libre concurrencia, y la posibilidad de afectar de manera significativa los estándares de transparencia e integridad en la contratación pública.

En consecuencia, se hace necesario que la eventual reforma normativa se oriente a la unificación, depuración y coherencia del régimen jurídico aplicable, mediante la adopción de reglas claras, sistemáticas y de fácil aplicación, que reduzcan la incertidumbre interpretativa, fortalezcan la selección objetiva y la seguridad jurídica en la actividad contractual del Estado, que mitiguen la ocurrencia de actos de corrupción.

3. ¿Cuál es el valor total de los contratos en 2024 que licitan, contratan o concesionan con privados? Detallar en archivo en formato Excel.

En atención al numeral 3 del cuestionario, se realizó la extracción y consolidación de la información disponible en las plataformas SECOP I y SECOP II, correspondiente a los **contratos reportados por la Agencia Nacional de**

FORMATO DE RESPUESTA PQRS

Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente en SECOP II durante la vigencia 2024.

La consulta se realizó bajo los siguientes criterios:

- **Rango de consulta:** del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024
- **Fecha de consulta:** 25 de marzo de 2026
- **Plataformas:** SECOP I y SECOP II
- **Filtro principal:** NIT de la entidad (900514813)
- **Criterios adicionales:** contratos con proveedor adjudicado, con valor mayor a cero y con fecha de firma dentro de la vigencia analizada.

Se precisa que, una vez realizada la validación en la plataforma SECOP I, no se identificaron registros de contratación asociados a la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente para la vigencia 2024, bajo los criterios de búsqueda definidos. En consecuencia, la información reportada corresponde en su totalidad a registros extraídos de SECOP II.

Resultados

A continuación, se presenta el resumen de la información obtenida:

Nombre Entidad	NIT Entidad	Año	Cantidad de contratos	Valor total de contratos	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	900514813	2024	566	\$38.570.305.561	\$37.270.018.349	\$1.300.287.211

Así mismo, el detalle de los procesos contractuales, incluyendo contratistas y valores, se remite en archivo Excel anexo denominado “1_2026_03_24_003994.xlsx”, conforme a lo solicitado.

Precisiones técnicas

Se precisa que las licitaciones bajo la modalidad “Licitación Pública – Acuerdo Marco de Precios” corresponden a la operación primaria celebrada y adjudicada por la ANCP-CCE en desarrollo de sus funciones, y pueden registrarse con valor cero.

La ejecución de dichos instrumentos se materializa mediante órdenes de compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC), las cuales cuentan con valor

FORMATO DE RESPUESTA PQRS

y disponibilidad presupuestal a cargo de las entidades compradoras en la operación secundaria.

Por esta razón, dichos registros se incluyen en las bases de datos, en tanto corresponden a contratos vigentes que deben ser objeto de seguimiento, supervisión y liquidación, aun cuando su valor inicial sea cero.

Sobre la calidad de la información

Finalmente, se informa que la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, en su calidad de ente rector del Sistema de Compra Pública y administrador de las plataformas SECOP, no es responsable por la información reportada por las entidades estatales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 1712 de 2014 (principio de calidad de la información), cada entidad es responsable de la veracidad, oportunidad y calidad de la información que publica. En consecuencia, la Agencia no está facultada para certificar información que no haya sido generada en el ejercicio directo de sus funciones.

La Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente reitera su disposición para participar en los espacios de diálogo institucional promovidos por el Congreso de la República, en el marco del análisis del Proyecto de Ley 270 de 2025, aportando insumos técnicos que contribuyan al fortalecimiento del Sistema de Compra Pública y a la adopción de mejores prácticas en materia de contratación estatal.

4. Realice una proyección presupuestal y temporal sobre cuándo y cómo la entidad podría adoptar los cambios propuestos en la iniciativa legislativa ya descrita.

Con relación a este numeral, desde el punto de vista financiero de la entidad, no es posible realizar una estimación presupuestal frente a los cambios planteados en la ley, en la medida en que las modalidades de contratación de diversos bienes y servicios se verían modificadas. Esta situación dificulta su cuantificación, dado que la ausencia de procesos competitivos impediría contar con referencias de precios de mercado que permitan proyectar de manera adecuada los costos asociados.

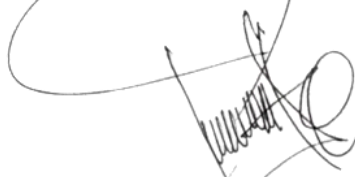
FORMATO DE RESPUESTA PQRS

En anexo a las respuestas consolidadas en el presente documento, se incluyen dos archivos adicionales que contienen información relevante para proporcionar una respuesta completa al requerimiento planteado.

Agradecemos la oportunidad de contribuir a la discusión sobre el Proyecto de Ley 270 de 2025, y reiteramos nuestra disposición para seguir colaborando en todos los procesos relacionados con la normativa y la implementación de sus disposiciones. Quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional que se considere necesario.

Por último, aprovechamos la oportunidad de manifestar la entera disposición de la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente– para atender las peticiones o solicitudes, así como para brindar el apoyo que se requiera en el marco de nuestras funciones.

Atentamente,



CRISTOBAL PADILLA TEJEDA

**Director General - Agencia Nacional de Contratación Pública –
Colombia Compra Eficiente**

Elaboro:	Juan David Montoya - Tatiana Baquero Iguaran Contratista de la Subdirección de Gestión Contractual Danny Osvaldo Rojas Montenegro – Coordinador grupo de Financiera – Secretaría General Maria del Carmen Marroquin – Coordinadora grupo de Contratación – Secretaría General Norberto Valencia Mejía Analista - Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico.
Revisó:	Diana Lucia Saavedra Castañeda Contratista de la Subdirección de Gestión Contractual Valentina Paola León Orozco - Coordinadora de la Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico Luis Enrique Perea Garces – Asesor Experto – Dirección General
Aprobó:	Carolina Quintero Gacharná - Subdirectora de Gestión Contractual. Marina de las Mercedes Avendaño Carrascal - Subdirector de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico
Anexo:	Documento denominado "Observaciones al PL No. 554/2025C Cámara" 1_2026_03_24_003994.xlsx. 1_2026_03_24_003994

FORMATO DE RESPUESTA PQRS

Para visualizar los anexos se recomienda utilizar un aplicativo de visualización de PDF como Adobe Reader que permite la descarga de los archivos anexos. Si presenta inconvenientes para ver los anexos, en el siguiente enlace podrá ver el [instructivo](#)

INSTRUCTIVO DE PQRS

1. **Fecha:** No realizar ajustes. Se encuentra automatizada.
2. **Encabezamiento o datos del destinatario:** se dejan entre cuatro y seis espacios sencillos después de la fecha. Los datos que componen el encabezamiento se escriben a espacios sencillos. Estos datos son:

Tratamiento: se escribe la palabra completa, con mayúscula inicial y sin abreviaturas: Señor, Señora, Licenciado, Ingeniera, Economista, Doctor, etc.

Nombres y apellidos: completos de la persona a quien va dirigida la carta, escritos en mayúsculas fijas.

Cargo: Gerente, Rector, jefe, Fiscal, Interventoría, etc. El cargo se escribe con mayúscula inicial y, si es muy largo, se puede dividir, evitando la partición silábica.

Nombre de la empresa o Entidad: se escribe iniciando con mayúscula. Si el nombre de la empresa es una sigla, se escribe con mayúsculas fijas.

Correo electrónico: se incluye el correo electrónico del peticionario que registrado en la petición.

Dirección: ubicación del destinatario. Puede ser escrita en la misma carta, pero es indispensable que vaya en el sobre.

Nombre de la ciudad de destino: se escribe con mayúscula inicial

3. **Asunto:** También llamado "referencia", es una línea que sintetiza el tema principal del informe. Cuando la carta se dirige a una entidad, es conveniente que se escriba el asunto detalladamente para facilitar la respuesta deseada y se incluye el número de radicado de la petición

FORMATO DE RESPUESTA PQRS

4. **Texto:** Es el mensaje que se transmite al destinatario. Está contenido, en promedio, en tres párrafos: el primero introduce el tema; el segundo lo desarrolla, y el tercero presenta información complementaria. Los párrafos deben ser cortos, claros y sencillos.

5. **Despedida:** Es una expresión de cortesía. Se puede elegir una expresión de una o dos palabras, seguida de una coma o una oración terminada en punto. Ejemplos: Cordialmente, Atentamente, Respetuosamente, Cordial saludo, Atento saludo, Muchas gracias por su atención, etc.

6. **Firma:** Está compuesta por tres elementos:

- **Nombre y apellidos** del remitente, escritos en mayúsculas fijas.
- **Rúbrica:** Es el conjunto de rasgos de figura determinada que, como parte de la firma, pone cada cual después de su nombre o título. La rúbrica se escribe encima del nombre del remitente que se ha escrito en mayúsculas fijas.
- **Cargo:** Se escribe debajo del nombre y con mayúscula inicial. Cuando firman dos o más personas, los nombres van por categoría.

7. **Identificación del transcriptor:** a dos interlíneas del firmante o del último renglón escrito se anota el nombre con mayúscula inicial, e inicial del apellido de la persona que elaboró y que aprobó el informe con su firma o visto bueno, al igual que el cargo o profesión. Se recomienda emplear la letra Institucional de acuerdo con el manual de imagen de la entidad. En caso de ser necesario, se colocará el aprobó por parte del jefe o subdirector del proceso que autoriza la elaboración del informe.

FORMATO DE RESPUESTA PQRS

Bogotá D.C., 25 de marzo de 2026

Honorables

Olga Lucía Velásquez Nieto

John Jairo Gonzalez Agudelo

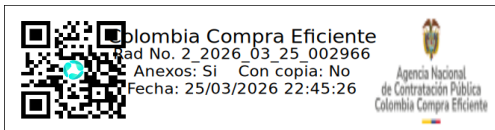
Alexander Bermúdez Lasso

Modesto Aguilera Vides

Jairo Reinaldo Cala

comision.cuarta@camara.gov.co

La Ciudad



Asunto: Proposición Audiencia Pública del Proyecto de Ley No. 270 de 2025
Camara "Por medio del cual se modifica la ley 80 de 1993 que expide el
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública "

Radicado: Respuesta al radicado # 1_2026_03_24_003994

Honorables Representantes a la Cámara,

La Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Ley 4170 de 2011¹, es el ente rector de la contratación pública y actúa como un organismo técnico especializado, cuyo objetivo es desarrollar e impulsar políticas públicas y herramientas orientadas a la organización y articulación de los partícipes en los procesos de compras y contratación pública. En ejercicio de estas funciones, busca orientar la gestión contractual de las entidades hacia la reducción de los costos en sus operaciones, fortalecer los escenarios de transparencia y visibilidad de la gestión contractual pública y formular parámetros para la adecuada gerencia contractual del Estado².

¹ Las funciones asignadas a la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente se encuentran plasmadas en el artículo 3 del Decreto Ley 4170 de 2011.

² Decreto Ley 4170 de 2011 "Por el cual se crea la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, se determinan sus objetivos y estructura". Artículo 2. Objetivo de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente: La Agencia Nacional de Contratación Pública –

FORMATO DE RESPUESTA PQRS

En el marco de dichas competencias, a continuación, se procede a dar respuesta a las preguntas formuladas en los siguientes términos:

1. ¿Qué comentarios tiene su entidad al Proyecto de Ley 270/2025 Cámara de Representantes?

En el marco de las competencias asignadas a esta Agencia mediante el precitado Decreto Ley, me permito anexar nuevamente el documento que ya había sido remitido al Honorable Congreso de la República. En dicho documento se consignan noventa y dos (92) comentarios formulados por el equipo de la Subdirección de Gestión Contractual al Proyecto de Ley No. 554/2025C Cámara, "Por medio del cual se modifica la Ley 80 de 1993 que expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública", el cual fue incorporado en su integridad en el Proyecto de Ley No. 270/2025.

Al respecto, es pertinente señalar que, tras revisar en su totalidad el Proyecto de Ley No. 270/2025 Cámara, se constató que este corresponde al mismo texto ya analizado previamente. En consecuencia, esta Agencia reitera las observaciones presentadas y pone nuevamente a su consideración las anotaciones al articulado propuesto, las cuales se encuentran detalladas en el documento adjunto para su estudio.

En primer lugar, la Agencia resalta la importancia de impulsar una reforma estructural del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (en adelante EGCAP) que dé respuesta integral a los retos que afronta la contratación estatal en Colombia. Al respecto, se evidencia que el proyecto se enfoca en modificaciones concretas frente a la incorporación de algunos principios, junto con otras disposiciones referidas a la capacidad contractual, la normativa aplicable a los contratos estatales, el uso de las potestades excepcionales, el perfeccionamiento del contrato, aspectos sobre la nulidad y la responsabilidad. Se trata entonces de una forma parcial que continúa la tendencia de modificar de manera fraccionada este marco jurídico. Adicionalmente, la reforma propuesta no incorpora medidas para hacer frente a los retos más importantes del sistema de compras públicas.

Colombia Compra Eficiente-, como ente rector, tiene como objetivo desarrollar e impulsar políticas públicas y herramientas, orientadas a la organización y articulación, de los partícipes en los procesos de compras y contratación pública con el fin de lograr una mayor eficiencia, transparencia y optimización de los recursos del Estado.

FORMATO DE RESPUESTA PQRS

En este sentido, esta Agencia destaca, entre otros aspectos, la necesidad de que una reforma estructural del EGCAP implemente acciones para reducir la proliferación y dispersión normativa. Dado que las normas en materia de contratación pública actualmente son profusas, confusas e incluso contradictorias, los procesos de selección son en ocasiones innecesariamente extensos y complejos. Es fundamental que la reforma unifique las disposiciones contenidas en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, así como aquellas referentes a la contratación pública incluidas en normas relacionadas con otros temas, como es el caso de la Ley 590 de 2000, la Ley 1474 de 2011, la Ley 2069 del 2020, y el Decreto 1860 de 2021, entre otros. Afrontar este reto es urgente, pues es un factor que incrementa el riesgo de corrupción y facilita e incentiva prácticas para desviar los recursos públicos.

De forma similar, es importante dar respuesta a otros retos como el uso excesivo de regímenes exceptuados que incrementan los riesgos de implementación de modalidades no competitivas y al exceso de discrecionalidad en las adjudicaciones. Para esto es fundamental que el EGCAP se convierta en un marco normativo funcional y simplificado para la ejecución de los programas cada vez más complejos que deben atender las entidades, esto tiene el potencial de evitar la desviación a regímenes especiales y a la contratación directa.

Otros aspectos esenciales, como la revisión y fortalecimiento integral del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, así como del marco que rige el conflicto de intereses en la contratación estatal no se encuentran reflejados en el proyecto propuesto. Tampoco se evidencian disposiciones que refuercen los mecanismos para prevenir la colusión y otras prácticas restrictivas de la competencia en las compras públicas, como la posibilidad de otorgar herramientas a los agentes de las áreas de contratación para actuar cuando evidencian este tipo de acuerdos previo a la adjudicación de los contratos.

La reforma propuesta tampoco afronta los desafíos transversales de la gestión pública, como es la tendencia a la sostenibilidad, el cambio climático y la necesidad de promover la innovación desde el sector público.

En segundo lugar, la Agencia evidencia con preocupación que una de las reformas propuestas en el proyecto de ley tendrá el efecto inevitable de incrementar el uso de la contratación directa. El uso indebido de modalidades de selección no competitivas ha sido resaltado por múltiples organismos

FORMATO DE RESPUESTA PQRS

internacionales y nacionales³ como uno de los obstáculos más importantes para la transparencia en las compras públicas.

Por lo anterior, el orden de preferencia propuesto en el artículo 22 del proyecto de ley tiene el potencial de convertirse en un nuevo foco de corrupción en la contratación estatal. Las reglas establecidas señalan que cuando la entidad estatal no cuente con la capacidad para ejecutar la obra o prestar el servicio público por cuenta propia, deberán propender por suscribir convenios interadministrativos con las entidades que puedan cumplir con la ejecución. En efecto, la regla propuesta dispone criterios difusos que fomentan el uso excesivo de una de las causales de contratación directa que contempla el estatuto. Lo cual incrementa el riesgo de corrupción y desincentiva la libre concurrencia como principio fundamental de la contratación pública.

El proyecto establece una sujeción estricta a los principios regulados exclusivamente en la ley propuesta, dejando de lado la realidad jurídica según la cual la contratación pública, si bien contempla principios propios, también está permeada por principios generales del derecho administrativo que no son mencionados, como la proporcionalidad, la legalidad, entre otros, que actúan de forma complementaria y transversal en las diferentes etapas y actuaciones del proceso contractual, desde la planeación hasta su ejecución y etapa postcontractual. Al ignorarlos, el proyecto limita la flexibilidad interpretativa necesaria para una adecuada aplicación normativa y gestión de los contratos estatales.

Así mismo, se evidencia desconocimiento de los principios básicos de la contratación estatal, especialmente en lo que respecta a la remisión normativa a los contratos civiles y comerciales. Como es bien conocido, los contratos estatales, por su naturaleza, se construyen sobre la base de estas figuras del derecho privado, siendo estas normas aplicables en todo aquello no regulado expresamente por el EGCAP. Sin embargo, se evidencia que el proyecto propone una remisión normativa para el contenido del contrato estatal en materias como el derecho penal o disciplinario, cuyos objetivos, enfoques y principios difieren

³ La revisión de 17 años de resultados del Índice de Transparencia de las Entidades Públicas (ITEP) y de estudios e investigaciones de Transparencia por Colombia muestra que una de las principales dimensiones que afectan la contratación pública es el exceso de la contratación directa en todos los niveles de la administración. Disponible en: Transparencia por Colombia. Radiografía de los Hechos de Corrupción 2021 – 2022 en Colombia. <https://transparenciacolombia.org.co/wp-content/uploads/2024/06/Radiografia-Corrupcion-VF-VF.pdf>

FORMATO DE RESPUESTA PQRS

sustancialmente de los contractuales, lo que genera evidencia falta la técnica jurídica y resulta incoherente su redacción en la norma en que se incluye.

De otra parte, se evidencia que en el proyecto se asignan responsabilidades al supervisor y al interventor, que son propias del jefe o representante legal, en contradicción con lo establecido por la Ley 80 de 1993. Si bien estas figuras contemplan un marco de obligaciones de vigilancia y control frente a los contratos, la responsabilidad de dirección y control no se desprende del representante legal, por lo que un asunto como la imposición de sanciones, por ejemplo, no puede ser atribuido al interventor como se pretende en este proyecto. Esta confusión genera una alteración del principio de responsabilidad, afecta la seguridad jurídica y puede derivar en conflictos normativos entre los artículos vigentes y los propuestos.

También se advierte que, algunos artículos introducen disposiciones que ya reguladas por normas vigentes como la Ley 1150 de 2007 y la Ley 2195 de 2022, especialmente en lo relativo a la obligación de publicar toda la información contractual en el SECOP. Esta reiteración innecesaria no solo resta eficiencia al proceso legislativo, sino que también puede generar confusión interpretativa y operativa en las entidades estatales.

Contrario a lo propuesto, desde esta Agencia se considera que EGCAP requiere una revisión detallada de las causales previstas y los requisitos para la contratación directa, con el fin de limitar su uso a aquellos procesos en los que no es posible la pluralidad de oferentes. Lo anterior implica una reforma de las modalidades de selección que promueva la aplicación prioritaria de mecanismos competitivos sobre la contratación directa. Este enfoque no solo reduce el riesgo de corrupción, sino que permite que el Estado contrate productos, servicios y obras de mejor calidad, al mejor precio posible, cumpliendo el fin último de la contratación estatal de obtener “valor por dinero” y satisfacer de manera oportuna a las necesidades de la ciudadanía, en especial, de la población más vulnerable.

Finalmente, y en complemento a los comentarios inicialmente presentados, se destaca que la Corte Constitucional informó que, mediante la Sentencia C-033 de 2022, fueron declarados inexecutable los artículos 100 y 101 de la Ley 2294 de 2023, los cuales regulaban las asociaciones público populares y las asociaciones de iniciativa público popular en el marco del Plan Nacional de Desarrollo. Según lo indicado por la Corte, dichas disposiciones vulneraban la

FORMATO DE RESPUESTA PQRS

reserva de ley prevista en el artículo 150 de la Constitución para la regulación de la contratación estatal, al delegar en el Gobierno Nacional la definición de elementos esenciales de la contratación pública —como los sujetos destinatarios y las condiciones para celebrar los contratos— y desconocer los límites de la potestad reglamentaria establecidos en el artículo 189-11 de la Constitución.

Teniendo en cuenta la decisión de la Alta Corporación, se recomienda suprimir todas las referencias a esta figura en el articulado, incluida la incorporada en el artículo 7, numeral 1, puesto que, a la fecha, dichas formas asociativas no existen en el ordenamiento jurídico.

Por las razones expuestas en el presente oficio y en los 92 comentarios expresado al margen del documento anexo, esta Agencia desaconseja continuar el trámite de la reforma planteada en el proyecto de ley del asunto, y extiende una invitación a los honorables congresistas para dialogar y acompañar una reforma estructural del EGAP que fortalezca la transparencia, eficiencia, sostenibilidad e innovación en el Sistema de Compra y Contratación Pública de Colombia. Dicho lo anterior, manifestamos nuestra entera disposición a la posibilidad de realizar una mesa técnica con el equipo de la Entidad para avanzar en este objetivo.

2. Bajo el modelo actual de contratación en su entidad ¿cómo se desarrolla en los desafíos y objetivos misionales propios y cómo alteraría la mencionada iniciativa legislativa el proceso de contratación?

La Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente-, ANCP-CCE, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Ley 4170 de 2011⁴, es una unidad administrativa especial, descentralizada de la Rama Ejecutiva del orden nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa y financiera, adscrita al Departamento Nacional de Planeación, cuyo objetivo es desarrollar e impulsar políticas públicas y herramientas orientadas a la organización y articulación de los partícipes en los procesos de compras y contratación pública.

⁴ Las creación y funciones asignadas a la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente se encuentran plasmadas en el artículo 1 y 3 correspondientes del Decreto Ley 4170 de 2011.

FORMATO DE RESPUESTA PQRS

En este entendido, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 80 de 1993 y los artículos 10, 14 y 24 de la Ley 1150 de 2007, la ANCP-CCE, ostenta la denominación de Entidad Estatal, es decir persona jurídica de derecho público creadas en virtud de la Constitución, la ley, ordenanza o acuerdo, o su creación sea autorizada por ésta.

En concordancia con lo anterior, la ANCP-CCE, en su calidad de entidad estatal, debe estructurar y adelantar sus procesos de contratación con sujeción estricta a los principios, reglas y procedimientos previstos en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública - EGCAP—Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y las demás disposiciones que los modifiquen, adicionen o complementen—. Lo anterior, en aras de garantizar la materialización de los principios de transparencia, economía, responsabilidad, eficiencia, eficacia y selección objetiva, que informan la actividad contractual del Estado.

En el marco de verificación del proyecto de ley, se encuentra necesario realizar previamente un breve análisis de la aplicación de la normatividad vigente desde la posición de entidad contratante, es así como en el desarrollo de los procesos de contratación que adelanta en ejercicio de sus funciones misionales y operativas, ha identificado que el marco normativo vigente presenta, en algunos casos, inconsistencias y diferencias interpretativas entre disposiciones normativas, lo cual dificulta su aplicación armónica tanto para la entidad que adelanta el proceso de contratación como para la adecuada acreditación de requisitos por parte de los proponentes

En el marco de la verificación del proyecto de ley, se considera necesario efectuar un análisis preliminar de la aplicación de la normatividad vigente desde la perspectiva de la entidad contratante, a partir de la experiencia en el desarrollo de los procesos de contratación adelantados en ejercicio de sus funciones misionales y operativas, evidenciando así, que el marco normativo actual presenta, en ciertos casos, inconsistencias y divergencias interpretativas entre disposiciones normativas, lo que presenta dificultades tanto para la entidad, como para los proponentes en la adecuada acreditación de los requisitos exigidos.

Aunado a lo anterior, si bien es cierto que en la aplicación efectiva de los lineamientos normativos que regulan la contratación pública actualmente, la entidad como entidad contratante enfrenta desafíos constantes, no puede desconocerse que dichos lineamientos persiguen fines esenciales del sistema de

FORMATO DE RESPUESTA PQRS

compras del Estado: garantizar la libre competencia, promover la igualdad de oportunidades entre los participantes y asegurar el respeto a los principios de transparencia, eficiencia y economía.

En este entendido, el proyecto de ley en mención, establece una sujeción estricta a los principios regulados exclusivamente en la ley propuesta, dejando de lado la realidad jurídica según la cual la contratación pública, si bien contempla principios propios, también está permeada por principios generales del derecho administrativo que no son mencionados, como la proporcionalidad, la legalidad, el debido proceso, entre otros, que actúan de forma complementaria y transversal en las diferentes etapas y actuaciones del proceso contractual, desde la planeación hasta su ejecución y etapa postcontractual. Al ignorarlos, el proyecto limita la flexibilidad interpretativa necesaria para una adecuada aplicación normativa y gestión de los contratos estatales.

Aunado a lo expuesto, el proyecto de ley en mención está desconociendo e integrando condiciones adicionales a los particulares que participan en los procesos de selección generando barreras para su participación.

Así mismo, se evidencia desconocimiento de los principios básicos de la contratación estatal, especialmente en lo que respecta a la remisión normativa a los contratos civiles y comerciales. Los contratos estatales, por su naturaleza, se construyen sobre la base de estas figuras del derecho privado, siendo estas normas aplicables en todo aquello no regulado expresamente por el EGCAP. Sin embargo, se evidencia que el proyecto propone una remisión normativa para el contenido del contrato estatal en materias como el derecho penal o disciplinario, cuyos objetivos, enfoques y principios difieren sustancialmente de los contractuales, lo que genera evidencia falta la técnica jurídica y resulta incoherente su redacción en la norma en que se incluye.

De otra parte, se evidencia que en el proyecto se asignan responsabilidades al supervisor y al interventor, que son propias del jefe o representante legal, en contradicción con lo establecido por la Ley 80 de 1993 y Ley 1474 de 2011. Si bien estas figuras contemplan un marco de obligaciones de vigilancia y control frente a los contratos, la responsabilidad de dirección y control no se desprende del representante legal, por lo que un asunto como la imposición de sanciones, por ejemplo, no puede ser atribuido al interventor como se pretende en este proyecto. Esta confusión genera una alteración del principio de responsabilidad, afecta la seguridad jurídica y puede derivar en conflictos normativos entre los artículos vigentes y los propuestos

FORMATO DE RESPUESTA PQRS

Conforme a lo expuesto, la ANCP-CCE, en su calidad de entidad sujeta al EGCAP, y que en el marco de sus funciones, lleva a cabo la gestión contractual, encuentra evidente no solo la conveniencia, sino la necesidad de adelantar una reforma normativa de carácter integral que supere la actual fragmentación regulatoria, sin embargo, dicha reforma no puede limitarse a introducir ajustes parciales o a ampliar figuras excepcionales, sin resolver las causas estructurales por las debilidades que presenta actualmente el sistema, por el contrario, cualquier intervención legislativa que incremente los márgenes de discrecionalidad, sin fortalecer simultáneamente los mecanismos de selección objetiva y libre competencia, y la posibilidad de afectar de manera significativa los estándares de transparencia e integridad en la contratación pública.

En consecuencia, se hace necesario que la eventual reforma normativa se oriente a la unificación, depuración y coherencia del régimen jurídico aplicable, mediante la adopción de reglas claras, sistemáticas y de fácil aplicación, que reduzcan la incertidumbre interpretativa, fortalezcan la selección objetiva y la seguridad jurídica en la actividad contractual del Estado, que mitiguen la ocurrencia de actos de corrupción.

3. ¿Cuál es el valor total de los contratos en 2024 que licitan, contratan o concesionan con privados? Detallar en archivo en formato Excel.

En atención al numeral 3 del cuestionario, se realizó la extracción y consolidación de la información disponible en las plataformas SECOP I y SECOP II, correspondiente a los **contratos reportados por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente en SECOP II durante la vigencia 2024.**

La consulta se realizó bajo los siguientes criterios:

- **Rango de consulta:** del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024
- **Fecha de consulta:** 25 de marzo de 2026
- **Plataformas:** SECOP I y SECOP II
- **Filtro principal:** NIT de la entidad (900514813)
- **Criterios adicionales:** contratos con proveedor adjudicado, con valor mayor a cero y con fecha de firma dentro de la vigencia analizada.

FORMATO DE RESPUESTA PQRS

Se precisa que, una vez realizada la validación en la plataforma SECOP I, no se identificaron registros de contratación asociados a la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente para la vigencia 2024, bajo los criterios de búsqueda definidos. En consecuencia, la información reportada corresponde en su totalidad a registros extraídos de SECOP II.

Resultados

A continuación, se presenta el resumen de la información obtenida:

Nombre Entidad	NIT Entidad	Año	Cantidad de contratos	Valor total de contratos	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	900514813	2024	566	\$38.570.305.561	\$37.270.018.349	\$1.300.287.211

Así mismo, el detalle de los procesos contractuales, incluyendo contratistas y valores, se remite en archivo Excel anexo denominado **"1_2026_03_24_003994.xlsx"**, conforme a lo solicitado.

Precisiones técnicas

Se precisa que las licitaciones bajo la modalidad "Licitación Pública – Acuerdo Marco de Precios" corresponden a la operación primaria celebrada y adjudicada por la ANCP-CCE en desarrollo de sus funciones, y pueden registrarse con valor cero.

La ejecución de dichos instrumentos se materializa mediante órdenes de compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC), las cuales cuentan con valor y disponibilidad presupuestal a cargo de las entidades compradoras en la operación secundaria.

Por esta razón, dichos registros se incluyen en las bases de datos, en tanto corresponden a contratos vigentes que deben ser objeto de seguimiento, supervisión y liquidación, aun cuando su valor inicial sea cero.

Sobre la calidad de la información

Finalmente, se informa que la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, en su calidad de ente rector del Sistema de Compra

FORMATO DE RESPUESTA PQRS

Pública y administrador de las plataformas SECOP, no es responsable por la información reportada por las entidades estatales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 1712 de 2014 (principio de calidad de la información), cada entidad es responsable de la veracidad, oportunidad y calidad de la información que publica. En consecuencia, la Agencia no está facultada para certificar información que no haya sido generada en el ejercicio directo de sus funciones.

La Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente reitera su disposición para participar en los espacios de diálogo institucional promovidos por el Congreso de la República, en el marco del análisis del Proyecto de Ley 270 de 2025, aportando insumos técnicos que contribuyan al fortalecimiento del Sistema de Compra Pública y a la adopción de mejores prácticas en materia de contratación estatal.

4. Realice una proyección presupuestal y temporal sobre cuándo y cómo la entidad podría adoptar los cambios propuestos en la iniciativa legislativa ya descrita.

Con relación a este numeral, desde el punto de vista financiero de la entidad, no es posible realizar una estimación presupuestal frente a los cambios planteados en la ley, en la medida en que las modalidades de contratación de diversos bienes y servicios se verían modificadas. Esta situación dificulta su cuantificación, dado que la ausencia de procesos competitivos impediría contar con referencias de precios de mercado que permitan proyectar de manera adecuada los costos asociados.

En anexo a las respuestas consolidadas en el presente documento, se incluyen dos archivos adicionales que contienen información relevante para proporcionar una respuesta completa al requerimiento planteado.

Agradecemos la oportunidad de contribuir a la discusión sobre el Proyecto de Ley 270 de 2025, y reiteramos nuestra disposición para seguir colaborando en todos los procesos relacionados con la normativa y la implementación de sus disposiciones. Quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional que se considere necesario.

Por último, aprovechamos la oportunidad de manifestar la entera disposición de la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente– para

FORMATO DE RESPUESTA PQRS

atender las peticiones o solicitudes, así como para brindar el apoyo que se requiera en el marco de nuestras funciones.

Atentamente,


CRISTOBAL PADILLA TEJEDA

**Director General - Agencia Nacional de Contratación Pública –
Colombia Compra Eficiente**

Elaboro:

Juan David Montoya - Tatiana Baquero Iguaran Contratista de la Subdirección de Gestión Contractual

Danny Osvaldo Rojas Montenegro – Coordinador grupo de Financiera – Secretaría General

Maria del Carmen Marroquin – Coordinadora grupo de Contratación – Secretaría General

Norberto Valencia Mejía Analista - Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico

Diana Lucia Saavedra Castañeda Contratista de la Subdirección de Gestión Contractual

Revisó:

Valentina Paola León Orozco - Coordinadora de la Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico

Luis Enrique Perea Garcés – Asesor Experto – Dirección General

Carolina Quintero Gacharná - Subdirectora de Gestión Contractual.

Aprobó:

Marina de las Mercedes Avendaño Carrascal Subdirector Técnico de Agencia – Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico

Anexo:

1. Documento denominado "Observaciones al PL No. 554/2025C Cámara"
2. 1_2026_03_24_003994.xlsx.

Para visualizar los anexos se recomienda utilizar un aplicativo de visualización de PDF como Adobe Reader que permite la descarga de los archivos anexos. Si presenta inconvenientes para ver los anexos, en el siguiente enlace podrá ver el [instructivo](#)



FORMATO DE RESPUESTA PQRSD

INSTRUCTIVO DE PQRSD

1. **Fecha:** No realizar ajustes. Se encuentra automatizada.
2. **Encabezamiento o datos del destinatario:** se dejan entre cuatro y seis espacios sencillos después de la fecha. Los datos que componen el encabezamiento se escriben a espacios sencillos. Estos datos son:

Tratamiento: se escribe la palabra completa, con mayúscula inicial y sin abreviaturas: Señor, Señora, Licenciado, Ingeniera, Economista, Doctor, etc.

Nombres y apellidos: completos de la persona a quien va dirigida la carta, escritos en mayúsculas fijas.

Cargo: Gerente, Rector, jefe, Fiscal, Interventoría, etc. El cargo se escribe con mayúscula inicial y, si es muy largo, se puede dividir, evitando la partición silábica.

Nombre de la empresa o Entidad: se escribe iniciando con mayúscula. Si el nombre de la empresa es una sigla, se escribe con mayúsculas fijas.

Correo electrónico: se incluye el correo electrónico del petionario que registrado en la petición.

Dirección: ubicación del destinatario. Puede ser escrita en la misma carta, pero es indispensable que vaya en el sobre.

Nombre de la ciudad de destino: se escribe con mayúscula inicial

3. **Asunto:** También llamado "referencia", es una línea que sintetiza el tema principal del informe. Cuando la carta se dirige a una entidad, es conveniente que se escriba el asunto detalladamente para facilitar la respuesta deseada y se incluye el número de radicado de la petición

4. **Texto:** Es el mensaje que se transmite al destinatario. Está contenido, en promedio, en tres párrafos: el primero introduce el tema; el segundo lo desarrolla, y el tercero presenta información complementaria. Los párrafos deben ser cortos, claros y sencillos.

5. **Despedida:** Es una expresión de cortesía. Se puede elegir una expresión de una o dos palabras, seguida de una coma o una oración terminada en punto. Ejemplos: Cordialmente, Atentamente, Respetuosamente, Cordial saludo, Atento saludo, Muchas gracias por su atención, etc.

6. **Firma:** Está compuesta por tres elementos:



FORMATO DE RESPUESTA PQRS

- **Nombre y apellidos** del remitente, escritos en mayúsculas fijas.
- **Rúbrica:** Es el conjunto de rasgos de figura determinada que, como parte de la firma, pone cada cual después de su nombre o título. La rúbrica se escribe encima del nombre del remitente que se ha escrito en mayúsculas fijas.
- **Cargo:** Se escribe debajo del nombre y con mayúscula inicial. Cuando firman dos o más personas, los nombres van por categoría.

7. **Identificación del transcriptor:** a dos interlíneas del firmante o del último renglón escrito se anota el nombre con mayúscula inicial, e inicial del apellido de la persona que elaboró y que aprobó el informe con su firma o visto bueno, al igual que el cargo o profesión. Se recomienda emplear la letra Institucional de acuerdo con el manual de imagen de la entidad. En caso de ser necesario, se colocará el aprobó por parte del jefe o subdirector del proceso que autoriza la elaboración del informe.